



IQTP
INSTITUTO
QUINTANARROENSE
DE TRANSPARENCIA
PARA EL PUEBLO

RECURSO DE REVISIÓN.

EXPEDIENTE: RR/0371-26/IQTP

SUJETO OBLIGADO: MUNICIPIO DE PLAYA
DEL CARMEN.

AUTORIDAD GARANTE ESTATAL: INSTITUTO
QUINTANARROENSE DE TRANSPARENCIA PARA EL
PUEBLO

PROYECTISTA: DANIEL ALVAREZ SÁNCHEZ.

Chetumal, Quintana Roo a 05 de agosto de 2026¹.

Resolución por la que el Instituto Quintanarroense de Transparencia para el Pueblo **REVOCA la respuesta emitida por el MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN** a la solicitud de información número 1411288100130526 (expediente con registro en PNT: MPDC2607043) por las razones y motivos siguientes:

ÍNDICE

GLOSARIO	2
ANTECEDENTES	2
I. Solicitud	2
II. Trámite del recurso	4
CONSIDERANDOS	9
PRIMERO. Competencia	9
SEGUNDO. Causales de improcedencia	9
TERCERO. Razones o motivos de inconformidad y pruebas	10
CUARTO. Estudio de fondo	11
QUINTO. Orden y cumplimiento	18
RESUELVE	19

¹ Todas las fechas corresponden al año 2026, salvo mención de lo contrario.

Eliminado: 1-1 por contener: NOMBRE en términos de lo dispuesto en los artículos 40 fracción II, 115 de la LGTAIP; artículos 122, 127, 128 Y 129 LTAIPQROO; los numerales Trigésimo octavo, Quincuagésimo sexto, el sexagésimo y sexagésimo segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas y al acuerdo IQTP/UTAIPDP/06-02/X/2026 de la sexta sesión extraordinaria del Comité de Transparencia del IQTP.

GLOSARIO

Constitución Federal	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Constitución Local	Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo
Instituto / Órgano Garante	Instituto Quintanarroense de Transparencia para el Pueblo.
Ley de Transparencia	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Plataforma / PNT	Plataforma Nacional de Transparencia
Recurso	Recurso de Revisión con número de Expediente RR/0371-26/IQTP
Sujeto Obligado	Municipio de Playa del Carmen.
Recurrente	1
Buzón SICOM	Buzón de Comunicación entre Autoridades Garantes y Sujetos Obligados.

De las constancias obrantes en el expediente, así como de la narración de los hechos formulados en el presente recurso de revisión, se advierten los siguientes:

ANTECEDENTES

I. Solicitud.

I.1 Presentación de la solicitud. En fecha 03 de abril, la parte recurrente presentó, vía *Plataforma Nacional de Transparencia*, solicitud de información ante el Sujeto Obligado, identificada con número de Folio **1411288100130526**, requiriendo lo siguiente:

"De acuerdo sus funciones y facultade en el artículo 1 y demás relativos aplicables del Reglamento Interno del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Playa del Carmen, Quintana Roo respetuosamente solicito: 1. Relación de todas las comisiones en las que han participado las Regidurías durante el último ejercicio fiscal, incluyendo la comisión asignada por el Ayuntamiento a cada regidor(a). 2. Programa anual de trabajo presentado por cada Regiduría para el desempeño de sus comisiones. 3. Proyectos, iniciativas o medidas promovidas por cada Regiduría en el marco de las comisiones a las que pertenecen. 4. Actas, informes o registros de las comisiones que evidencien la participación de las Regidurías y su contribución en la deliberación, dictamen y seguimiento de los asuntos tratados. 5. Apoyo técnico, humano o financiero solicitado y autorizado por las Regidurías para el desempeño de sus funciones en cada comisión. 6. Informes anuales presentados por cada Regiduría sobre las labores desarrolladas en las comisiones que presiden o integran." (SIC)

I.2 Respuesta. Mediante oficio número **MPDC/PM/UVTAIP/2755/2026**, de fecha 17 de abril, la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de

Datos Personales del Sujeto Obligado, dio contestación a la solicitud de información, en los términos sustanciales siguientes:

"... se le informa que de conformidad con lo previsto en los artículos 4, 7, 13, 14, párrafo primero, 22 fracción XVI, 42 fracciones II y IV, 134, 135, 138, 139, 140, 141 y 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo, se procede a dar respuesta a su solicitud con información proporcionada por las Regidurías del H. Ayuntamiento de Playa del Carmen, de este Sujeto Obligado, en los términos siguientes:

Se anexan al mismo, los oficios de respuesta proporcionadas por Regidurías de este H. Ayuntamiento del Municipio de Playa del Carmen, Quintana Roo.

No omito señalar, que, **respecto al costo de reproducción por digitalización la información señalada en los oficios de respuesta adjuntos al presente, hacemos de su conocimiento que con fundamento en la fracción V del artículo 131 de la Ley de Hacienda del Municipio de Playa del Carmen, Quintana Roo, es de 0.005 U.M.A por foja útil...** (sic).

Nota: lo resaltado es propio.

I.3 Interposición del recurso de revisión. El 20 de abril, la parte ahora recurrente presentó recurso de revisión, el cual se tuvo por interpuesto en esa misma fecha, en el que señaló como acto que se recurre y como puntos petitorios, lo siguiente:

"...1. VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE GRATUIDAD (ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. El acto consistente en el cobro de copias determinado por el sujeto obligado, en la respuesta emitida a la solicitud de acceso a la información causa agravio al suscrito al vulnerar el derecho humano de acceso a la información pública, reconocido en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya que el cobro indebido viola el principio de gratuidad del derecho de acceso a la información la autoridad responsable causa agravio directo al suscrito al exigir el pago por la digitalización de la información, lo anterior contraviene de manera directa lo dispuesto en el artículo 17 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo, el cual establece que el acceso a la información es gratuito, y que únicamente podrán cobrarse los costos de reproducción en la modalidad solicitada y en este caso que nos ocupa la modalidad solicitada fue es vía electrónica quedando prohibido imponer cuotas o tarifas que restrinjan su ejercicio, sino una MODALIDAD DISTINTA A LA SOLICITADA... "(sic).



II. Trámite del recurso de revisión.

II.1 Radicación y Turno. De conformidad a los artículos 35, fracción II, 155, 156, 157 y 158 de la *Ley de Transparencia*, así como las demás disposiciones aplicables, mediante acuerdo de fecha 23 de abril, se radicó el presente recurso de revisión, asignándole el número **RR/0371-26/IQTP** y remitiendo al proyectista el presente recurso con la finalidad de poner el proceso en estado de resolución.

II.2 Admisión. Mediante acuerdo de fecha 20 de mayo, se admitió el Recurso a trámite, ordenándose emplazar al *Sujeto Obligado* en términos de lo establecido en la fracción IV del artículo 164 de la *Ley de Transparencia*. Apercibiéndole que, de no contestar, se tendrían por ciertos los hechos denunciados por la parte recurrente.

II.3 Contestación del Sujeto Obligado. El día 01 de junio, se tuvo por recepcionado, vía Buzón SICOM, el oficio número MPDC/PM/UVTAIP/4238/2026, de fecha 29 de mayo, firmado por el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, manifestando sustancialmente lo siguiente:

"CONTESTACIÓN"

Visto lo anterior, y atendiendo los agravios del Recurrente, esta Unidad de Vinculación para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Playa del Carmen, Quintana Roo, da respuesta de la siguiente manera:

Si bien el acceso a la información es un derecho fundamental que se encuentra garantizado por el Estado, su ejercicio en ciertas modalidades puede estar sujeto al pago de derechos por concepto de reproducción esto está fundamentado conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo en los artículos 9, fracción VII, 17, 151 fracción I, que manifiestan:

Artículo 9. Las Autoridades Garantes Estatales y los Sujetos Obligados deberán regir su funcionamiento de acuerdo con los principios siguientes:

VII. Gratuidad: Consiste en el acceso a la información pública no genera costo alguno para las personas solicitantes, solo podrá requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción y entrega solicitada conforme a lo establecido en la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables;

Artículo 17. El ejercicio del derecho de acceso a la información es gratuito y solo se podrá requerir el pago por los gastos correspondientes a la modalidad de reproducción y entrega solicitada, de conformidad con los derechos, productos y aprovechamientos establecidos en la legislación aplicable, sin embargo, en ningún caso los ajustes razonables que se realicen para garantizar el acceso a la información a personas solicitantes con discapacidad, será con algún costo.

Artículo 151. En caso de existir costos para obtener la información, deberán cubrirse de manera previa a la entrega y no podrán ser superiores a la suma de:

I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información;

...

La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas simples. Las Unidades de Transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo a las circunstancias socioeconómicas de la persona solicitante.

El costo corresponde exclusivamente a los gastos de reproducción de la información solicitada, siendo estos la digitalización necesaria para realizar la entrega por la modalidad seleccionada por el hoy recurrente, toda vez esta es **Electrónica por medio de la PNT**, toda vez que algunos de los documentos a los que intenta acceder, únicamente se encuentran en estado físico, que implique lucro alguno por parte de este Sujeto Obligado.

Continuando con la contestación, se puede observar que en el agravio del hoy recurrente:

"El sujeto obligado no justificó la imposibilidad de entregar la información en formato electrónico...."

Lo cual resulta **completamente falso** ya que se puede observar en el oficio de notificación MPDC/PM/UVTAIP/2755/2026 en el cual se le indica al solicitante que se anexan los oficios de respuesta proporcionados por las Regidurías, por lo que al analizar cada uno de ellos, se puede observar que algunos de ellos declaran tenerlos en estado físico, en consecuencia esta Unidad de Transparencia le indica claramente el fundamento jurídico y el costo, no obstante lo anterior, me permito señalar lo establecido en la Ley de Hacienda del Municipio de Playa del Carmen del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2026, en la fracción V del artículo 131 contempla el costo por foja en realización de versión pública de la siguiente manera:

Artículo 131. Por los materiales que se utilicen para reproducir la información que proporcionen los sujetos obligados de naturaleza municipal, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo, pagarán un derecho conforme a la siguiente:

TARIFA

I. Por la expedición de documentos en copia simple:

- a) De una a veinte fojas no se causará derecho alguno.
- b) De veintiún fojas en adelante de 0.025 U.M.A. por cada una.

II. Por la expedición de videocintas 2.00 U.M.A. por cada una.

III. Por la expedición de audiocassettes 1.00 U.M.A. por cada uno.

IV. Por la expedición de disco compacto 1.00 U.M.A. por cada uno.

V. Por la digitalización de documentos archivo del Municipio a partir de veintiún fojas en adelante, 0.005 U.M.A. por cada foja.

VI. Versiones Públicas, 0.040 U.M.A. por cada foja.

Lo anterior que en la inteligencia que el total del monto a pagar sería el resultado aritmético de la suma de fojas por el monto antes mencionado siendo el siguiente:

1298 fojas – 20 fojas gratuitas = 1278 fojas x 0.005 U.M.A. x \$117.31= \$750 pesos

Lo anterior de acuerdo a lo declarado por la segunda y séptima regiduría, por lo que se puede observar que el cobro solicitado como costo de reproducción, se encuentra debidamente justificado, por la normativa en la materia, la cual resulta ser de aplicación general, por lo que, para la entrega de la información solicitada, deberá ser cubierto el costo de reproducción solicitado de manera previa, no implicando en ello, la vulneración de los principios de legalidad, transparencia y equidad.

II.4. Vista. Mediante acuerdo de fecha 19 de junio, se dio vista a la parte recurrente de la contestación al Recurso de Revisión por parte del Sujeto Obligado, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V, del artículo 164, de la Ley de Transparencia.

II.5. Contestación a la vista. En fecha 25 de junio, la parte recurrente dio contestación a la vista descrita en el punto anterior, señalando de manera esencial lo siguiente:

"... **PRIMERO.** La respuesta emitida por el sujeto obligado es incompleta, incongruente y carente de exhaustividad, al no atender la totalidad de los puntos materia de la solicitud de información.

La respuesta emitida por el sujeto obligado vulnera mi derecho humano de acceso a la información pública, al no proporcionar de manera completa, congruente y exhaustiva la información expresamente solicitada.

En la solicitud de acceso requerí:

3. La relación de todas las comisiones en las que han participado las Regidurías durante el último ejercicio fiscal, incluyendo la comisión asignada por el Ayuntamiento a cada Regidor o Regidora;
4. El programa anual de trabajo presentado por cada Regiduría para el desempeño de sus comisiones;
5. Los proyectos, iniciativas o medidas promovidas por cada Regiduría en el marco de las comisiones que integran;
6. Las actas, informes o registros que acrediten la participación de las Regidurías en las sesiones de comisión y su intervención en la deliberación, dictaminación y seguimiento de los asuntos tratados;
7. La información relativa al apoyo técnico, humano o financiero solicitado y autorizado para el desempeño de sus funciones; y
8. Los informes anuales rendidos por cada Regiduría respecto de las actividades desarrolladas en las comisiones que presiden o integran.

Sin embargo, la respuesta impugnada omite pronunciarse de manera puntual sobre cada uno de los requerimientos formulados y no proporciona la documentación que razonablemente debe obrar en los archivos del sujeto obligado. En algunos casos únicamente se realizaron manifestaciones genéricas o se entregó información parcial, sin que ello permita tener por atendida la solicitud.

La autoridad responsable tenía la obligación de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de las unidades administrativas competentes y emitir una respuesta debidamente fundada, motivada, congruente y completa respecto de cada uno de los puntos solicitados, circunstancia que no aconteció en el presente caso.

En consecuencia, la respuesta impugnada incumple los principios de máxima publicidad, certeza, congruencia y exhaustividad que rigen el derecho de acceso a la información pública, afectando con ello el ejercicio efectivo de dicho derecho.

SEGUNDO. La remisión de hipervínculos o de información diversa no satisface la solicitud de acceso a la información.

Asimismo, causa agravio que el sujeto obligado haya pretendido atender la solicitud mediante la remisión de hipervínculos o documentos que no corresponden de manera específica con la información requerida.

Los enlaces electrónicos proporcionados no contienen la relación de comisiones, los programas anuales de trabajo, los proyectos o iniciativas promovidas, las actas e informes de las comisiones, la información relativa al apoyo técnico, humano o financiero, ni los informes anuales de labores solicitados. Por el contrario, remiten a información de carácter general o distinta de la expresamente requerida, lo que impide conocer y acceder a los documentos materia de la solicitud.

La entrega de hipervínculos únicamente resulta válida cuando éstos permiten localizar de manera directa, completa e inequívoca la información solicitada. Cuando los enlaces remiten a información distinta, incompleta o de difícil localización, la respuesta incumple con el deber de garantizar el acceso efectivo a la información pública.

Por ello, la respuesta emitida carece de congruencia y exhaustividad, por lo que se solicita a ese Instituto que declare fundados los presentes agravios y ordene al sujeto obligado realizar una búsqueda exhaustiva en todas las unidades administrativas competentes y entregar la totalidad de la información requerida o, en su caso, emitir una respuesta debidamente fundada y motivada respecto de la inexistencia o clasificación de la información solicitada.

TERCERO. Causa agravio la falta de interpretación jurídica y técnica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo el ejercicio del derecho de acceso a la información es gratuito, permitiéndose únicamente el cobro de los gastos derivados de la reproducción y entrega de la información cuando éstos se generen efectivamente con motivo de la modalidad elegida por la persona solicitante.

En el caso concreto, la información fue requerida en modalidad electrónica, circunstancia que resulta jurídicamente relevante, toda vez que dicha modalidad no implica costos de reproducción física ni de entrega material para el sujeto obligado. En consecuencia, la puesta a disposición de la información a través de medios electrónicos, correos institucionales, plataformas digitales o cualquier otro mecanismo tecnológico de transmisión no genera gastos susceptibles de ser trasladados a la persona solicitante.

Bajo una interpretación literal, sistemática y funcional del artículo 17, se concluye que cuando la información solicitada se encuentre disponible en formato electrónico o pueda ser digitalizada razonablemente para su entrega por medios electrónicos, el sujeto obligado debe proporcionarla de manera gratuita, sin exigir pago alguno por conceptos relacionados con búsqueda, procesamiento, análisis, integración, digitalización ordinaria o envío electrónico de la información.

Asimismo, el principio de máxima publicidad y el criterio de accesibilidad que rigen el derecho de acceso a la información obligan a privilegiar los medios electrónicos como mecanismo idóneo para garantizar un acceso rápido, eficiente y gratuito a la información pública.

Por tanto, al haber sido solicitada la información en modalidad electrónica, no se actualiza el supuesto de excepción previsto en el artículo 17 relativo a los gastos de reproducción y entrega, ya que éstos únicamente proceden cuando la persona solicitante requiere la información en formatos físicos o mediante mecanismos que impliquen un costo material directo para el sujeto obligado.

En consecuencia, la entrega de la información debe realizarse de manera gratuita, al no existir erogación alguna asociada a su reproducción o entrega en la modalidad electrónica elegida por la persona solicitante, garantizando así el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información en los términos previstos por la ley..." (sic).

II.6. Fecha de audiencia.

El día 10 de julio, con fundamento en lo previsto por la fracción VI del artículo 164 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, se emitió el correspondiente Acuerdo para la celebración de la audiencia para el desahogo de pruebas y la presentación de alegatos, de las partes, señalándose las diez horas con treinta minutos del día 15 de julio.

II.7. Audiencia y cierre de instrucción.

El día 15 de julio, con fundamento en lo establecido en las fracciones VI y VII del artículo 164 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo, se llevó a cabo, en el domicilio oficial de este Instituto, la celebración de la audiencia para el desahogo de pruebas y la presentación de alegatos por las partes, sin haber comparecido a la citada audiencia, ni presencial, ni a través de documento escrito para presentar sus alegaciones.

Cabe señalar que, una vez admitidas las probanzas ofertadas por las partes, estas se desahogaron por su propia y especial naturaleza.

Asimismo, sobre la prueba de inspección que ofrece la parte ahora recurrente, no se admitió la prueba ofertada, esto debido a que no es idónea, ya que el procedimiento que priva a este medio de defensa administrativo es de carácter documental y legal, centrado en verificar si el sujeto obligado cumplió con la entrega de los documentos requeridos o justifico debidamente su inexistencia o clasificación y no así realizar una inspección material o sensorial de hechos siendo innecesaria para la sustanciación del presente recurso de revisión, toda vez que el objeto de este medio de impugnación consiste en analizar la legalidad, congruencia, exhaustividad y suficiencia de la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, con base en las constancias que integran el expediente y en la documentación que las partes aporten durante su tramitación.

De igual forma, derivado del estado procesal que guarda el presente expediente, y con fundamento en el artículo 159, párrafo primero, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo, este Instituto determinó **ampliar por veinte días** el plazo de cuarenta días previsto para emitir la resolución correspondiente, atendiendo al incremento en la carga de trabajo derivada de los Recursos de Revisión en trámite.

En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el artículo 164 fracción IX de la Ley de Transparencia, en la referida acta de audiencia, se declaró el cierre de instrucción del presente recurso de revisión.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencia.

El *Instituto*, es competente para conocer y resolver el presente Recurso de Revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 fracciones IV, V inciso a), 29, 30 fracción I, 32 fracción III, 34, 35 fracción II, y demás relativos aplicables, de la *Ley de Transparencia*. Lo anterior, toda vez que el presente Recurso de Revisión, fue presentado en contra de uno de los Sujetos Obligados de los cuales conoce este Instituto en carácter de Autoridad Garante Estatal.

SEGUNDO. Causales de improcedencia.

Este Instituto determinó la procedencia del recurso de revisión por considerar que reunía los requisitos previstos en los artículos 157, 158, y 164 fracción IV, todos de la *Ley de Transparencia*.

Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, este *Instituto* realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, atento a lo establecido en la tesis de jurisprudencia de título **"APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO"**,² emitida por el Poder Judicial de la Federación.

Una vez analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el *sujeto obligado* no hizo valer causal de sobreseimiento o desechamiento alguna, ni este *Instituto* advierte su actualización, motivo por el cual resulta indispensable analizar el fondo del asunto, a efecto de determinar si la respuesta emitida por el *sujeto obligado* estuvo apegada a derecho o se actualiza, en su caso, el agravio hecho valer por la parte recurrente.

TERCERO. Razones o motivos de inconformidad y Pruebas.

a) Solicitud. Como obra en autos del presente expediente, la parte hoy recurrente requirió la integración y el desempeño de las Regidurías en las comisiones edilicias durante el último ejercicio fiscal, incluyendo sus programas de trabajo, proyectos e iniciativas, la evidencia documental de su participación, los apoyos solicitados y autorizados, así como los informes de las labores desarrolladas.

b) Respuesta del sujeto obligado. Misma que se encuentra transcrita en el Antecedente I.2 de la presente resolución.

c) Razones o motivos de inconformidad del recurrente. Del análisis al recurso de revisión presentado se observa que el recurrente señala como razón o motivo de inconformidad, los costos de entrega de la información; lo que actualiza la hipótesis prevista en la fracción IX del artículo 156 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo.

d) Pruebas ofrecidas y valoración probatoria. Respecto de las documentales obtenidas y descargadas de la *Plataforma y del Buzón SICOM*, es de señalar que estas constancias constituyen documentales públicas que tienen valor probatorio

² "Registro No. 168387. Localización: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXVIII, Diciembre de 2008. Página: 242. Tesis: 2a./J. 186/2008 Jurisprudencia Materia(s): Administrativa.

pleno en términos de los artículos 44 y 45 fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 56 fracción II y 77 del Código de Procedimientos y Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, todos de aplicación supletoria en la materia, de conformidad al artículo 8 fracción II de la Ley de Transparencia y de los Lineamientos de la Funcionalidad, Operación y Mejoras de la Plataforma Nacional de Transparencia.

CUARTO. Estudio de fondo.

a) Controversia. Del análisis al recurso de revisión presentado se desprende que el recurrente señala como razón o motivo de inconformidad, los costos y cambio de modalidad de entrega de la información; lo que actualiza la hipótesis prevista en la fracción IX del artículo 156 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo, toda vez que el sujeto obligado señala que el costo por digitalizar la información requerida es procedente de conformidad a la normativa interna del Ayuntamiento.

b) Marco normativo. El artículo 1º de la *Constitución Federal*, establece como fuente de reconocimiento de derechos humanos a la misma carta magna y a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; además, prevé la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, adoptando siempre la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce como principio **pro persona**.

De esta manera, el derecho humano de acceso a la información pública, es un derecho humano reconocido en nuestra carta magna que, en la parte que interesa (artículo 6, inciso A), fracción III), establece que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos. Mismos principios y bases que recoge nuestra *Constitución Local* en su artículo 21.

Asimismo, en términos del artículo 21 de la *Ley de Transparencia*, cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, **Municipios**, Órganos Constitucionales Autónomos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el Estado, son **sujetos obligados** a transparentar y **permitir el acceso a su información** y proteger los datos personales que obren en su poder.

Es por tales razones, que este Instituto analizará la legalidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, la cual debe ser acorde a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y demás disposiciones que resulten aplicables, con el objeto de garantizar que en los actos y resoluciones del *Sujeto Obligado* se respeten los principios de transparencia y acceso a la información, protección de los datos personales en su poder y las garantías de legalidad y seguridad jurídica.

c) Caso Concreto. Del análisis al recurso de revisión presentado se desprende que el recurrente señala como razón o motivo de inconformidad, el costo y el supuesto cambio de modalidad por la entrega de la información requerida; lo que actualiza la hipótesis prevista en la fracción IX del artículo 156 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo, mientras que el Sujeto Obligado reitera que la digitalización genera un costo, tal y como lo establece la normatividad interna del Ayuntamiento.

Para tal efecto, resulta indispensable establecer que, de conformidad con los artículos 13, 14, 18 y 20, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo, **toda información pública documentada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los Sujetos Obligados es pública y debe ser accesible a cualquier persona**; por lo que, en su generación, publicación y entrega, **éstos deberán garantizar que sea accesible, confiable, completa, congruente, verificable, veraz, expedita y oportuna, atendiendo las necesidades del derecho humano de acceso a la información de toda persona**. Asimismo, **se presume que la información debe existir cuando se refiere a facultades, competencias o funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan al Sujeto Obligado y exista obligación jurídica de documentarla**; de igual forma, en caso de que dichas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, el Sujeto Obligado deberá motivar la respuesta que lo justifique, propiciando en todo momento las condiciones necesarias para garantizar que el procedimiento de acceso, entrega y publicación de la información sea accesible a cualquier persona.

Aunado a lo anterior, debe decirse que el **artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo** establece que los Sujetos Obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, **conforme a las características físicas o electrónicas de la información con la que cuenten o del lugar donde se encuentre**.

Ahora bien, partiendo de que la solicitud de información versó sobre la integración y el desempeño de las Regidurías en las comisiones edilicias, incluyendo la relación de las comisiones en las que participaron; sus programas anuales de trabajo; los

proyectos, iniciativas o medidas promovidas; las actas, informes o registros que acreditaran su intervención; los apoyos técnicos, humanos o financieros solicitados y autorizados; así como los informes anuales de labores, este Instituto advierte que el Municipio recurrido no negó la existencia de la información, no manifestó incompetencia ni sostuvo que ésta actualizara alguna causal de clasificación, ni estableció un cambio de modalidad en la entrega de la información. Por el contrario, reconoció contar con la documentación, ofrece entregarla en formato digital, y **señaló que la información comprendía un total de 1,298 fojas, de las cuales podría hacer entrega posteriormente del pago por la digitalización de esta.**

Frente a dicha determinación, la persona recurrente manifestó que el cobro vulneraba el principio de gratuidad, toda vez que la modalidad elegida desde la presentación de la solicitud fue electrónica. Por su parte, al rendir su contestación dentro del presente recurso, el Sujeto Obligado sostuvo que el pago resultaba necesario para digitalizar la documentación física remitida por las Regidurías. En consecuencia, la controversia se circunscribe a determinar si el cobro por digitalización impuesto para entregar electrónicamente la información solicitada resulta compatible con el principio de gratuidad que rige el derecho humano de acceso a la información.

Bajo ese contexto, el artículo 6º, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece literalmente:

"A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

*III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, **tendrá acceso gratuito a la información pública**, a sus datos personales o a la rectificación de éstos."*

En concordancia con el mandato constitucional, el artículo 9, fracción VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo dispone:

*"VII. **Gratuidad:** Consiste en que el acceso a la información pública no genera costo alguno para las personas solicitantes, **sólo podrá requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción y entrega solicitada** conforme a lo establecido en la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables;"*

Asimismo, el artículo 17 de la propia Ley establece textualmente:

"Artículo 17. El ejercicio del derecho de acceso a la información es gratuito y solo

se podrá requerir el pago por los gastos correspondientes a la modalidad de reproducción y entrega solicitada, de conformidad con los derechos, productos y aprovechamientos establecidos en la legislación aplicable, sin embargo, en ningún caso los ajustes razonables que se realicen para garantizar el acceso a la información a personas solicitantes con discapacidad, será con algún costo."

De la interpretación conjunta de las disposiciones transcritas, se desprende que la gratuidad constituye una regla general que rige el derecho humano de acceso a la información pública, mientras que la posibilidad de exigir un pago, es excepcional y debe encontrarse directamente relacionada con la modalidad de reproducción y entrega solicitada. Esto implica, distinguir entre el acceso a la información, que no puede condicionarse económicamente, y los materiales que, en determinados casos, sean necesarios para reproducirla y entregarla. Por tanto, **no toda actividad administrativa o técnica requerida para atender una solicitud puede convertirse en un concepto cobrable**, pues ello permitiría trasladar a la persona solicitante los costos ordinarios que supone localizar, preparar, procesar y entregar información pública.

En el caso concreto, la parte ahora recurrente señaló expresamente que requiere la información en modalidad electrónica; asimismo, la propia contestación permite advertir que el cobro no corresponde a la adquisición de un soporte material que deba entregarse a la persona recurrente, sino al procedimiento interno consistente en escanear documentos que obran en papel para convertirlos en archivos electrónicos. En ese sentido, **la digitalización constituye una operación técnica, mediante la cual se transforma el formato de la documentación, pero no representa, por sí misma, un material de reproducción entregado a la persona solicitante**; de manera que cobrar una cantidad, por cada foja escaneada, convierte una actividad institucional, necesaria para atender la modalidad electrónica, en una condición económica para ejercer el derecho.

El hecho de que la documentación comprenda 1,298 fojas y se encuentre físicamente en los archivos municipales, no modifica la naturaleza de la operación; tales circunstancias pueden explicar el volumen del trabajo requerido para convertir los documentos en archivos electrónicos, pero **no acreditan que exista un material individualizable que deba ser adquirido y posteriormente entregado a la persona recurrente**. El tiempo empleado por las personas servidoras públicas, la utilización del equipo institucional y las actividades necesarias para preparar la respuesta forman parte del funcionamiento ordinario del Sujeto Obligado y **no pueden trasladarse automáticamente a quien ejerce el derecho de acceso a la información**.

Aunado a lo anterior, el artículo 22 de la Ley de Transparencia local establece, en sus fracciones XII y XV, las siguientes obligaciones:

"Artículo 22. Para el cumplimiento del objeto de esta Ley, **los Sujetos Obligados deberán cumplir con las siguientes obligaciones**, según corresponda, de acuerdo con su naturaleza:

XII. Difundir proactivamente la información de interés público;

XV. Promover la digitalización de la información en su posesión y la utilización de las tecnologías de información y comunicación, de conformidad con las políticas que al efecto establezca el Sistema Nacional;"

Por consiguiente, la conservación de documentos exclusivamente en soporte físico constituye una condición de gestión documental atribuible al propio Sujeto Obligado, quien además tiene el deber de promover su digitalización. En tales condiciones, la falta de una versión electrónica no puede traducirse, sin una justificación suficiente, en una barrera económica para la persona que solicita acceder a la información mediante la modalidad electrónica.

Ahora bien, el Sujeto Obligado sustentó el cobro en el artículo 131, fracción V, de la Ley de Hacienda del Municipio de Playa del Carmen, cuyo contenido literal es el siguiente:

"V. Por la digitalización de documentos archivo del Municipio a partir de veintiún fojas en adelante, 0.005 U.M.A. por cada foja."

Sin embargo, la sola previsión de una tarifa, no agota el análisis de su compatibilidad con el principio constitucional de gratuidad. Al tratarse de una cuota directamente relacionada con el ejercicio del derecho de acceso a la información, su aplicación debe estar sustentada en elementos objetivos que permitan advertir que el monto corresponde al costo real de materiales utilizados para reproducir y entregar la información, y no únicamente al desarrollo de una actividad administrativa o técnica realizada con los recursos humanos y materiales del Municipio.

Lo anterior se robustece con la jurisprudencia P./J. 82/2026 (12a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de aplicación obligatoria en términos del artículo 16 constitucional, cuyo contenido es el siguiente:

Registro digital: 2032148

Instancia: Pleno

Duodécima Época

Materias(s): Constitucional

Tesis: P./J. 82/2026 (12a.)

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 9, Mayo de 2026, Tomo

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LOS COBROS DERIVADOS DEL EJERCICIO DE ESE DERECHO REQUIEREN UNA MOTIVACIÓN REFORZADA DEL LEGISLADOR PARA SER ACORDES CON EL PRINCIPIO DE GRATUIDAD.³

De la jurisprudencia citada se desprende que, para que un cobro relacionado con el acceso a la información sea compatible con el principio de gratuidad, debe corresponder al costo de materiales utilizados para reproducir la información, a su envío o, en su caso, a la certificación de documentos y, que su valor tenga una base objetiva y razonable vinculada con los instrumentos de entrega efectivamente utilizados.

Así, la respuesta del Sujeto Obligado cuantifica el número de fojas a digitalizar que presuntamente deberán realizarse, pero no acredita un costo material de reproducción en los términos exigidos por la jurisprudencia.

Asimismo, la solicitud comprendió seis contenidos diferenciados y el Sujeto Obligado en su contestación reconoce que diversas regidurías proporcionaron información electrónica o vínculos para su consulta. Por ello, el Sujeto Obligado debió privilegiar la entrega directa de los documentos que ya obraran en formato electrónico, indicar las fuentes precisas respecto de aquellos que estuvieran publicados y verificar en todas las áreas competentes, tales como la Secretaría General, presidencias y secretarías de las comisiones, para que ofrecieran las versiones digitales.

De igual forma, como del propio reglamento Interno del H. Ayuntamiento del Municipio de Playa del Carmen y demás normatividad aplicable, se advierte que los programas de trabajo, proyectos, solicitudes de apoyo, informes, iniciativas, actas, controles de asistencia y votación, minutas y dictámenes no son documentos eventuales o ajenos a las funciones municipales, sino registros que el propio Reglamento obliga a generar, presentar, conservar o remitir como parte del funcionamiento de las Regidurías y de las comisiones edilicias. Precisamente porque documentan el análisis, deliberación, vigilancia y toma de decisiones del Gobierno Municipal, su divulgación permite conocer el desempeño de las personas integrantes del Ayuntamiento y exigirles rendición de cuentas.

Lo anterior se robustece con las obligaciones de transparencia previstas en el artículo 75 de la Ley de la materia, en sus fracciones XXVII y XLVIII, que disponen:

³ <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2032148>

"Artículo 75. Los Sujetos Obligados deberán poner a disposición del público de manera permanente y actualizada de forma sencilla, precisa y entendible, en la Plataforma Nacional y en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:

XXVII. Los informes que generen de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

XLVIII. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la prevista en otras disposiciones jurídicas aplicables."

Por su parte, el artículo 77, aplicable específicamente a los Municipios, establece en sus fracciones XVII y XVIII:

"Artículo 77. Además de las obligaciones de transparencia común a que se refiere el Capítulo II del presente Título, los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo del Estado y de **los Municipios** deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información, en el ámbito de su competencia:

XVII. Las gacetas municipales, las cuales deberán comprender los resolutivos y acuerdos aprobados por los ayuntamientos;

XVIII. Las actas de sesiones de cabildo, los controles de asistencia; así como los justificantes por inasistencias, de las personas integrantes del Ayuntamiento a las sesiones de cabildo y el sentido de votación de las y los miembros del cabildo sobre las iniciativas o acuerdos;"

Por lo anteriormente expuesto, este Instituto estima que el cobro controvertido no resulta compatible con el principio de gratuidad, pues la modalidad elegida fue electrónica, no se identificó un soporte material que justificara el importe exigido y la tarifa aplicada no se vinculó con una base objetiva y razonable de insumos utilizados.

Asimismo, la documentación solicitada reviste un marcado interés público, ya que las actas, dictámenes, iniciativas, programas e informes permiten conocer y evaluar el ejercicio de las funciones de las Regidurías, la forma en que participan en las decisiones municipales y el uso de los apoyos públicos destinados a sus responsabilidades. En consecuencia, el agravio resulta fundado, por lo que procede dejar sin efectos el cobro y ordenar al Sujeto Obligado que entregue, sin costo y en modalidad electrónica, la información correspondiente a la solicitud de información, utilizando los archivos digitales y vínculos existentes, y digitalizando la;

documentación que únicamente obre en soporte físico.

Lo anterior, toda vez que la normatividad interna que funda y permite el cobro al H. Ayuntamiento de Playa del Carmen, ha quedado superado con la interpretación Constitucional que ha realizado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia antes transcrita.

Es en atención a lo anteriormente razonado y fundado que el Instituto Quintanarroense de Transparencia para el Pueblo, estima que las razones o motivos de inconformidad hechos valer por la parte recurrente en cuanto al cobro por la digitalización, resultan **FUNDADOS**.

QUINTO. Orden y cumplimiento.

a) **Efectos.** En atención a lo señalado en el Considerando **CUARTO** de la presente resolución y con fundamento en los artículos 166 fracción III y 167 fracción III de la *Ley de Transparencia*, es que resulta procedente **REVOCAR** la respuesta otorgada por el *Sujeto Obligado*, **MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN** y, por lo tanto ordenar lo siguiente:

- Se le **ORDENA** al *Sujeto Obligado* emitir una nueva respuesta, debidamente fundada y motivada, en la que atienda de manera congruente y exhaustiva la solicitud de información, debiendo hacer entrega de la información requerida en la modalidad elegida por la parte solicitante, es decir, la información correspondiente a la solicitud de información, utilizando los archivos digitales y vínculos existentes, y digitalizando la documentación que únicamente obre en soporte físico .

b) **Plazos.** En aplicación de los artículos 167, fracción IV y 176 de la *Ley de Transparencia* se concede al *Sujeto Obligado*, a través de su Titular de la Unidad de Transparencia, un plazo de **CINCO DÍAS HÁBILES**, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de la presente resolución, para que cumpla con lo ordenado.

Igualmente, se le concede un plazo de **TRES DÍAS HÁBILES**, contados a partir del día siguiente a aquel en que cumplimente lo ordenado en el párrafo anterior, para que remita a este *Instituto*, las constancias que acrediten el cumplimiento de lo ordenado en la presente resolución, de conformidad al artículo 177 de la *Ley de Transparencia*.

En caso de incumplimiento a la presente resolución, se le aplicará al sujeto obligado antes mencionado una de las medidas de apremio previstas en el artículo 179 de la *Ley de Transparencia*.

Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado, se:

RESUELVE

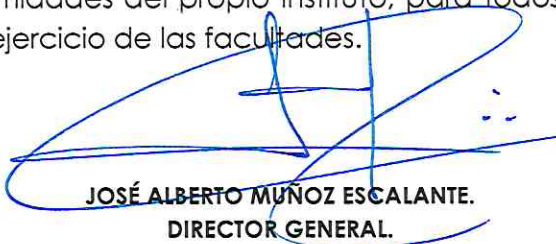
PRIMERO. Con fundamento en los artículos 166 fracción III y 167 fracción III de la *Ley de Transparencia*, **se REVOCA** la respuesta otorgada a la solicitud de información con folio **1411288100130526** por el *Sujeto Obligado* **MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN** y **se le ordena dar cumplimiento a lo señalado en el Considerando Quinto** de la presente resolución.

SEGUNDO. Se hace del conocimiento de la parte *Recurrente* que, en caso de estar inconforme con la presente resolución, podrá impugnarla en los términos que se establecen en el artículo 174 de la *Ley de Transparencia*

TERCERO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 169 en relación con el 75 fracción XXXIV de la *Ley de Transparencia*, una vez que haya causado estado la presente resolución, elabórese la versión pública correspondiente y publíquese; una vez hecho lo anterior, archívese este expediente como asunto totalmente concluido.

CUARTO. Se ordena **NOTIFICAR**, por un lado, al **MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN**, a través del Buzón SICOM, y por el otro, a **la parte recurrente** a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). Asimismo, publíquese en lista electrónica y estrados y **CÚMPLASE**.

Así lo resolvió **José Alberto Muñoz Escalante**, **Director General del Instituto Quintanarroense de Transparencia para el Pueblo**; quien firma el cinco de agosto del año dos mil veintiséis, asistido de Jorge Mario Canul Tuz, Director de Recursos de Revisiones e Inconformidades del propio Instituto, para todos los efectos legales a que haya lugar y en ejercicio de las facultades.


JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE.
DIRECTOR GENERAL.


JORGE MARIO CANUL TUZ.
DIRECTOR DE RECURSOS DE REVISIONES E INCONFORMIDADES.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18